

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: EUR 46/012/2005 (Público)

Servicio de Noticias 087/05

11 de abril de 2005

<http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR460122005>

Federación Rusa: El caso de Mikhail Khodorkovskii y otros individuos asociados con YUKOS

Según el punto de vista adoptado por Amnistía Internacional, existe un contexto político significativo para la detención y el procesamiento de Mikhail Khodorkovskii, ex director de la compañía YUKOS, y de otros individuos asociados a la misma compañía.

La organización de derechos humanos reconoce la importancia de este caso, que ha venido acompañado de numerosos informes sobre violaciones de las normas internacionales sobre juicios justos y de motivos de preocupación por la salud en relación con algunos de los acusados. Amnistía Internacional reconoce que entre los abogados de los acusados, las organizaciones rusas de derechos humanos y otros analistas cunde la idea de que estos casos tienen una motivación política, y ha escrito al Ministerio de Justicia y al fiscal general de la Federación Rusa para plantearles sus motivos de preocupación en relación con la detención, el procesamiento y el encarcelamiento de Mikhail Khodorkovskii; su socio empresarial Platon Lebedev; un ex funcionario de seguridad destinado en YUKOS, Aleksei Pichugin; una importante abogada de YUKOS, Svetlana Bakhmina; y Yelena Agranovskaia. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades rusas que respeten en estos casos las obligaciones contraídas en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, incluido el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

En sus cartas al Ministerio de Justicia y al fiscal general, Amnistía Internacional planteaba, entre otras preocupaciones, la presunta interferencia en el acceso y la comunicación entre abogado y cliente en los casos de Mikhail Khodorkovskii y Platon Lebedev; el carácter cerrado de los procedimientos judiciales, en particular en el caso de Aleksei Pichugin; la detención prolongada de Mikhail Khodorkovskii y Platon Lebedev en un SIZO o «aislador de investigación» en las etapas de investigación y juicio del proceso judicial; las presuntas deficiencias de asistencia médica en los casos de Platon Lebedev, Aleksei Pichugin y Svetlana Bakhmina; las denuncias relativas a los malos tratos sufridos bajo custodia por Aleksei Pichugin y Svetlana Bakhmina, y la reclusión de Aleksei Pichugin en Lefortovo, centro de detención bajo la jurisdicción del Servicio Federal de Seguridad.

El derecho a un juicio con las debidas garantías y el derecho a no recibir pena o trato cruel, inhumano y degradante son derechos humanos básicos, y Amnistía Internacional ha pedido a los Estados que los respeten en todos los casos sin excepción. La organización de derechos humanos ya había planteado anteriormente sus motivos de preocupación en relación con los juicios justos en Rusia, entre ellos la falta de independencia de los tribunales respecto al poder ejecutivo y otros aspectos del sistema judicial ruso en que no se garantiza el respeto de las normas de derechos humanos ni se protege a las personas frente a violaciones de derechos humanos, como hizo en el informe *Justicia en bruto: La ley y los derechos humanos en la Federación Rusa* (Índice AI: EUR 46/054/2003,

<http://web.amnesty.org/library/index/esIEUR460542003?open&of=esl-RUS>).

Amnistía Internacional cree que las preocupaciones sobre estos casos son indicativas de los problemas generales que aquejan al sistema de justicia penal de la Federación Rusa en relación con la independencia del poder judicial; el acceso efectivo a asesoramiento letrado, las condiciones de reclusión y el uso de tortura y malos tratos con el propósito de obtener confesiones. Al plantear nuestros motivos de preocupación a las autoridades rusas en el contexto de los procesos judiciales relacionados con YUKOS, confiamos en fomentar el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y sobre juicios justos para todas las personas en el sistema de justicia penal de Rusia.

Tanto organizaciones de derechos humanos como particulares rusos están convencidos de que Mikhail Khodorkovskii sufre persecución por sus actividades políticas, entre ellas la de financiar a partidos de la oposición. Cabe señalar la conclusión alcanzada recientemente por un tribunal del Reino Unido tras la vista de una solicitud de extradición cursada por el gobierno ruso en relación con Dmitri Maruev y Natalia Chernisheva: “Que el procesamiento del señor Khordorkovskii obedezca a motivos políticos tiene más probabilidades de ser cierto que de no serlo” (Tribunal de Magistrados de Bow Street, decisión del 18 de marzo de 2005 de rechazo a la extradición). Asimismo, el tribunal concluyó que un juicio con las debidas garantías contra Dmitri Maruev y Natalia Chernisheva, buscados en Rusia por el cargo de conspiración para cometer fraude, junto con Mikhail Khodorkovskii, probablemente estaría viciado por sus opiniones políticas y las de quienes están relacionados con ellos y que, además, los cargos en su contra tenían motivaciones políticas, al haber sido ordenados por el presidente Putin. Aunque la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no llegó a una decisión concluyente sobre cuál era la motivación política en estos casos, cabe señalar que, en su opinión, “las circunstancias de la detención y el procesamiento de los ejecutivos de Yukos parecen indicar que el interés de la acción del Estado en estos casos va más allá de la mera búsqueda de justicia penal para incluir semejantes elementos con la intención de debilitar a un destacado adversario político, intimidar a otros individuos económicamente acomodados y recuperar el control de activos económicos estratégicos”. De hecho, los grupos de derechos humanos rusos han observado un efecto “paralizador” sobre la libertad de expresión y la pluralidad política en Rusia como consecuencia del procesamiento de estos individuos.

No obstante, sin tener en cuenta si los cargos tienen o no motivaciones políticas, las autoridades rusas deben garantizar que Mikhail Khodorkovskii y sus socios son juzgados con las debidas garantías, en procesos que se ajustan a las obligaciones contraídas por Rusia en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos en los que es Estado Parte.